JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA RELEVANTE 2023



- DR. CHRISTIAN ROJAS CALDERÓN
- 19/ 05/ 2023



I.- EL PROBLEMA. Repensar, re-situar, normar la situación general de empleados públicos, en un contexto "liquidificado"

1) El impacto de la aplicación extensiva del principio de confianza legítima

2) Recepción y proyección en CS

3) Los efectos de ello: gestión del personal, obligaciones funcionarias, finanzas públicas, etc.

El arco de posibilidades es infinito ...

II.- EL PRIMER DICTÁMEN: E324301N23 DE MARZO DE 2023

1) Antecedentes

Presidenta del Sindicato de Trabajadores Independientes Profesionales y Administrativos a Honorarios del FOSIS, consultó si el traspaso a la contrata de los servidores a honorarios del FOSIS en virtud de las leyes N°s. 20.948 y 21.405 y del Oficio Circular N° 8 de 2022 del MH -que contiene las instrucciones de esa Secretaría de Estado para la aplicación de dicha normativa-, debe efectuarse durante el año 2022 o a partir del 2023 , y con el resguardo de los honorarios líquidos; y otras consultas adicionales o conexas.

Se deja constancia que la DIPRES determinó el número máximo de cupos.

2) Fundamento jurídico

Considera:

- En su origen, el Dictámen E173171 de 2022 sobre traspaso a contrata
- Ratificación a nivel legal en Art. 45 de la Ley N° 21.405 que regula dicho traspaso de personal de honorarios a contrata (5.000 para el 2022)
- Oficio Circular N° 8 del MH que contiene las instrucciones para la aplicación del art. 45.

- 3) COMENTARIO DICT. CGR E324301N23 (y vinculación con el dictamen 173171 de 2022 donde reinterpreta artículos 11 de la Ley N°18.834 y 4 de la Ley N°18.883)
- 3.1.) Aplica el principio de primacía de la realidad:

El Dictamen señaló que las disposiciones siempre tuvieron por objeto que la contratación a honorarios se circunscribiera a personas que no se integrarían de forma permanente al servicio, ni quedarían sujetas a una intensa dirección de la autoridad ni a la obligación de permanencia en el lugar de trabajo. De esta manera, su vínculo con el organismo carecería de la intensidad y estabilidad que caracteriza al de los funcionarios públicos, por lo que la contratación a honorarios quedaría restringida.

Entronca con SCS ROL N° 11.584-2014 "Paillán con IM de Santiago", haciendo primar el CT en el campo de las relaciones laborales y el Estado no puede invocar el principio de juridiccidad para propiciar la precariedad e informalidad laboral.

• 3.2.) Aplica del Principio de Confianza Legítima:

En ejercicio de la facultad de contratar a honorarios, en la mayoría de los casos se disponen sucesivas renovaciones de tales convenciones, lo que implica que el órgano público, a través de dichos prestadores de servicios y bajo esa modalidad contractual, termina desarrollando en forma permanente sus labores habituales, desvirtuando el carácter excepcional y eminentemente transitorio de tales contrataciones al igualarlas así con los empleos de planta y a contrata.

- A favor: Bermudez (2005) ->
- En contra: Letelier (2014) ->

3.3.) Traspasos a la contrata de servidores a honorarios con más de dos años en esta última condición: Asimilación a contrata.

En este contexto, si los servidores a honorarios no se encuentran en alguna de las hipótesis en que se autoriza la contratación a honorarios, sus funciones se deben asimilar a las del personal a contrata, vinculación que también es transitoria y que supone que luego de la segunda renovación anual, gozan de confianza legítima, conforme a la jurisprudencia actualmente vigente.

Asimismo, los servidores a honorarios que se encuentren en los supuestos de ser designados a contrata, pueden considerar sus prestaciones a honorarios previas, para efectos de invocar la confianza legítima.

III.- EL SEGUNDO DICTÁMEN: E327514N23 DE 30 MARZO DE 2023

1) Antecedentes:

El SAG, consultar si ese organismo ha procedido conforme al principio de probidad, al postular a distintas funcionarias al "Premio Guacolda", que otorga la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G. -ASOEX-, consistente en una estatuilla, un certificado y un estímulo económico.

Expresa que, en relación a las temporadas 2014-2015, 2015-2016, 2019-2020, funcionarias del SAG han sido galardonadas con este reconocimiento, pero que considera que han actuado de buena fe, ya que han sido postuladas por ese servicio y seleccionadas por la ASOEX, de modo que no han tenido participación en el premio, el que constituiría un donativo oficial o protocolar, o aquellos que autoriza la costumbre como manifestación de cortesía y buena educación.

En similares términos se refirió a la situación consultada la Subsecretaría de Agricultura

Es interesante la objeción planteada por el MIN.RR.EE.

2) Fundamento jurídico

- Art. 8 CPR -> principio
- Art. 52 LOCBGAE -> principio
- Art. 621 № 5 -> excepción en donativos oficiales y protocolares, y aquellos que autoriza la costumbre como manifestación de cortesía y buena educación
- Art. 1 de la Ley nº 20.880 -> probidad y prevención de conflictos de interés
- Art. 11 de la LBPA -> imparcialidad en los procedimientos administrativos => deber de abstención del art. 12
- Art. 61 letra g) EA -> obligaciones funcionarias
- Art. 84 letra f) EA -> prohibiciones funcionarias

- 3) La aplicación virtuosa del Principio de Probidad
- 3.1.) Sobre "principio"
- Siguiendo a Alexy, este debe entenderse como un mandato de optimización, es decir, concretable en reglas jurídicas específicas.

- Esto se hace en este caso específicamente en las disposiciones precisas de la LOCBGAE, EA y especialmente la LBPA a propósito de sus efectos en el procedimiento administrativo.

3.2.) Inobjetabilidad del dictamen

Elementos a considerar:

- No es donativo oficial o protocolar -> destinatario el servicio
- Destinado al goce <u>personal</u> de la galardonada
- Necesidad de interpretarlo extensivamente, evitar la "captura" del regulador (toneladas de literatura) que puede suceder institucionalmente pero también puede hacerse personalmente, como podría ser en este caso.

Muchas gracias!

Web:

unab.academia.edu/ChristianRojasCalderon

Email:

christian.rojas@unab.cl